



El Ministerio Fiscal español

Índice de contenidos

El Ministerio Fiscal: órgano constitucional	02
Una institución con historia	03
La sede de la Fiscalía General del Estado	04
La carrera fiscal	05
Organización del Ministerio Fiscal	06
Régimen disciplinario de los fiscales	13
¿Qué funciones tiene el Ministerio Fiscal?	14
Cooperación internacional	16
La Fiscalía Europea	18
Transparencia	18

El Ministerio Fiscal: órgano constitucional

El Ministerio Fiscal es un órgano constitucional, conforme al art. 124 de la Constitución Española, por tanto, su legitimidad y relevancia nace de la misma Constitución. En el marco del esquema de división de poderes está integrado en el poder judicial, tiene personalidad jurídica propia, autonomía funcional y presencia en todo el Estado.

Su **misión** es promover la acción de la justicia defendiendo la legalidad, los derechos ciudadanos y el interés público.

A través de órganos propios, el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones de acuerdo con los principios de **unidad de actuación y dependencia jerárquica**, que garantizan la aplicación uniforme y coherente de la ley en todo el territorio.

Asimismo, actúa de acuerdo con los principios de **legalidad e imparcialidad**. Es decir, cada actuación del Ministerio Fiscal tiene su fundamento en la Constitución y las leyes, y se lleva a cabo con objetividad e independencia.

El Ministerio Fiscal es único para todo el Estado. Los fiscales tienen la condición de autoridad y actúan como representantes de la institución.

La ley por la que se rige el Ministerio Fiscal es el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado por Ley 30/1981, de 30 de diciembre, modificado sustancialmente por Ley 24/2007, de 9 de octubre. La desarrolla el Reglamento aprobado por Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo, que regula su organización, estructura, principios, derechos, deberes, acceso a la carrera fiscal y régimen disciplinario.





Una institución con historia

En el pasado se utilizaban términos como "hombre del rey" o "procurador fiscal", como precedentes históricos de lo que hoy entendemos como Ministerio Fiscal. Pero fue la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870 la que encargó directamente a los fiscales promover la justicia, defender el interés público, y representar al Gobierno en sus relaciones con el Poder Judicial. Las leyes de enjuiciamiento posteriores, de 1881 y 1882, preveían la intervención de los fiscales en los procedimientos civiles y penales, con una posición clave y diferenciada del resto de las partes.

En 1926 se aprueba por Real Decreto de 21 de junio, el primer Estatuto del Ministerio Fiscal como institución autónoma, y que incide en su deber de promover la acción de la justicia, la defensa de los intereses públicos, en velar por el cumplimiento de las leyes y representar al Gobierno en sus relaciones con el Poder Judicial.

Por contraposición, el Reglamento Orgánico del Estatuto del Ministerio Fiscal aprobado por Decreto de 21 de febrero de 1958 define al Ministerio Fiscal como el representante del Gobierno en sus relaciones con la Administración de Justicia.

Posteriormente, el Decreto 437/1969, de 27 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Estatuto del Ministerio Fiscal, que deroga el anterior, configura al Ministerio Fiscal como un órgano de comunicación entre el Gobierno y los tribunales de justicia.

Esta configuración desaparece con la Constitución de 1978, que confiere al Ministerio Fiscal el carácter de institución autónoma, desvinculada del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial, cuya misión es la de promover la acción de la justicia, defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público tutelado por la ley, velar por la independencia de los tribunales y procurar la satisfacción del interés social.



La sede de la Fiscalía General del Estado

Hoy en día, la Fiscalía General del Estado tiene su sede en una de las arterias principales de Madrid: el Paseo de la Castellana, número 17. Pero no siempre fue así, antes se situaba en el Palacio de las Salesas, donde se encuentra el Tribunal Supremo.

El edificio que hoy es la sede central de la Fiscalía es una joya arquitectónica construida en 1912 por la familia del marqués de Fontalba y Cubas, un palacio al que también se accede por la calle Fortuny, número 4, con un jardín sobrio y equilibrado.

Desde que el Estado se hizo con la propiedad en los años cuarenta del pasado siglo, el edificio ha tenido varios usos públicos. Su papel más notable fue ser la sede del Consejo Supremo de Justicia Militar, el máximo órgano de Justicia en el ámbito castrense, hasta su desaparición.

Después de una restauración que concluyó a finales de 2004, el edificio ha recuperado todo su esplendor, aportando dignidad a la institución que alberga. Fue oficialmente inaugurado por Sus Majestades los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía el 11 de enero de 2006.



La carrera fiscal

El ingreso en la carrera fiscal se hace por oposición libre entre personas graduadas en Derecho y que reúnan las condiciones de capacidad exigidas. La oposición para el ingreso en las carreras judicial y fiscal es conjunta. Tras superar las pruebas teóricas, los aspirantes eligen el ingreso en una u otra carrera. Quienes optan por la carrera fiscal deben superar en el Centro de Estudios Jurídicos un curso teórico-práctico de formación, produciéndose tras ello el ingreso en la carrera fiscal con el correspondiente juramento y toma de posesión de la plaza de destino.

La plantilla orgánica del Ministerio Fiscal está formada por fiscales de sala del Tribunal Supremo, equiparados

a magistrados del Alto Tribunal, fiscales, equiparados a magistrados y abogados-fiscales, equiparados a jueces. Tales constituyen las que se denominan categorías primera, segunda y tercera de la carrera fiscal.

Los miembros del Ministerio Fiscal tienen un estatuto asimilado al de los magistrados, salvo las peculiaridades propias de la institución, y los mismos honores y tratamientos que los integrantes de la carrera judicial. Por este motivo, la Ley Orgánica del Poder Judicial se aplica supletoriamente en todo aquello no regulado por el Reglamento o por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Organización del Ministerio Fiscal

1. El Fiscal General del Estado

El/la Fiscal General del Estado ostenta la jefatura superior y representación del Ministerio Fiscal. Es nombrado y cesado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa valoración de su idoneidad por la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. Intervienen, pues, en su nombramiento los tres poderes del Estado. La elección debe recaer entre juristas españoles de reconocido prestigio y con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.

El mandato del Fiscal General tiene una duración de cuatro años y solo puede ser cesado por causas tasadas en la ley, que serán apreciadas, en su caso, por el Consejo de Ministros. El Fiscal General cesa con el Gobierno que le haya propuesto, pero no puede ser removido por aquel.

El Fiscal General actúa con imparcialidad e independencia, y no puede recibir órdenes del Gobierno ni de ningún otro órgano. En todo caso, el Gobierno podrá interesar del Fiscal General del Estado que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público, quien resolverá sobre la procedencia de la actuación interesada oída la Junta de Fiscales de Sala. Los gobiernos de las Comunidades Autónomas pueden realizar también ese tipo de peticiones a través del fiscal superior de cada comunidad.

El Fiscal General imparte las órdenes e instrucciones convenientes al servicio, al orden interno de la institución y al ejercicio de las funciones fiscales, pudiendo ser éstas tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos. Las directrices generales son esenciales para mantener el principio de unidad de actuación y se concretan fundamentalmente a través de tres instrumentos: las circulares, las instrucciones y las consultas.

Las **circulares** contienen criterios generales de actuación e interpretación de normas y también marcan pautas para definir la estructura y funcionamiento de los órganos del Ministerio Fiscal. Las **instrucciones**, de menor entidad que las circulares, son disposiciones más concretas sobre actuación y organización. Las **consultas** resuelven dudas sobre la interpretación de alguna norma.

La Fiscalía General del Estado apoya al Fiscal General en sus funciones. Dentro de la Fiscalía General del Estado hay varias unidades dirigidas por el Fiscal General:

- La Inspección Fiscal ejerce competencias de inspección por delegación permanente del Fiscal General del Estado.
- La Secretaría Técnica apoya al Fiscal General con estudios, investigaciones e informes, y colabora en la formación de los/las fiscales.
- La Unidad de Apoyo realiza labores de representación y relaciones institucionales con los poderes públicos, así como de comunicación y atención al ciudadano. Está encargada del análisis y elaboración de informes relativos a organización y funcionamiento del Ministerio Fiscal en materias de estadística, informática, personal, medios materiales, información, documentación y transparencia.





Áreas especializadas

El impulso del principio de especialización ha dado lugar a la creación de unidades especializadas en la Fiscalía General del Estado. Este proceso contribuye a elaborar criterios técnicos cualificados y a la coordinación en las diferentes áreas. En el ejercicio de sus funciones, estas unidades elaboran informes sobre los textos normativos propios de la especialidad. Al frente de las unidades hay fiscales de sala asistidos por fiscales.

En la actualidad, existen las siguientes unidades especializadas:

- Violencia sobre la mujer
- Seguridad y salud en el trabajo
- Medio ambiente
- Trata de personas y extranjería
- Seguridad vial
- Menores
- Cooperación internacional
- Criminalidad informática
- Protección de personas con discapacidad y mayores
- Delitos de odio y discriminación
- Derechos humanos y memoria democrática
- Delitos económicos
- Delitos contra la Administración Pública

Con la misma finalidad hay fiscales de sala delegados, nombrados por el Fiscal General del Estado, para que ejerzan sus funciones en ámbitos concretos como en las siguientes materias:

- Civil
- Social
- Contencioso-administrativo
- Protección y tutela de víctimas en el proceso penal
- Vigilancia penitenciaria

Cada una de las especialidades tiene a su vez fiscales delegados desplegados por el territorio que conforman una red muy tupida.



2. El Consejo Fiscal

El Consejo Fiscal es el órgano de representación de la carrera fiscal. Lo preside el/la Fiscal General del Estado y lo componen los miembros natos (el/la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo y el Fiscal de Sala Jefe/a de la Inspección) y los electivos, que son nueve fiscales pertenecientes a cualquiera de las categorías de la carrera fiscal, elegidos por un periodo de cuatro años por todos los miembros del Ministerio Fiscal en servicio activo.

Como órgano que asiste en sus funciones al Fiscal General del Estado, tiene entre sus principales competencias asesorarle en las materias que precise, elaborar los criterios generales para asegurar la unidad de actuación del Ministerio Fiscal en la estructura y funcionamiento de sus órganos, informar de las propuestas respecto al nombramiento de los diversos cargos y los ascensos, instar las reformas convenientes al servicio y al ejercicio de la función fiscal e informar los proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, organización y funciones del Ministerio Fiscal. También tiene entre sus cometidos resolver los recursos contra resoluciones dictadas en expedientes disciplinarios por los fiscales jefes.

3. La Junta de Fiscales de Sala y la Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas

La Junta de Fiscales de Sala es un órgano de asesoramiento técnico que asiste en materia doctrinal y técnica al Fiscal General del Estado, que la preside. La integran el/la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo y los/las Fiscales de Sala. Esta Junta ayuda al Fiscal General a la hora de formar criterios unitarios de interpretación y actuación legal, además de resolver, consultar, elaborar memorias y circulares y a preparar proyectos e informes que deban ser elevados al Gobierno.

Por otra parte, la Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas tiene como principal función asegurar la unidad y coordinación de la actuación y funcionamiento de las fiscalías en todo el territorio del Estado. También la preside el Fiscal General del Estado y está integrada por el/la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, los/las fiscales superiores y el/la Fiscal Jefa de la Secretaría Técnica, que actúa como secretario.

4. La Fiscalía del Tribunal Supremo

Esta fiscalía ejerce sus funciones ante el Tribunal Supremo, que es el órgano judicial superior en todos los órdenes con jurisdicción en toda España. De forma paralela a cómo se estructura este tribunal, la fiscalía se divide en secciones que actúan ante las distintas Salas del Tribunal: Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social y Militar. Entre sus competencias más características se encuentran el despacho de los recursos de casación y revisión contra sentencias dictadas en instancias inferiores. El Fiscal General del Estado ejerce la jefatura directa, asistido y sustituido por el/la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo.

5. La Fiscalía ante el Tribunal Constitucional

Interviene ante el Tribunal Constitucional, regulado en su propia Ley Orgánica y con jurisdicción en todo el territorio español. Este tribunal es competente para conocer de recursos de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, así como del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades fundamentales, de los conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o de éstas entre sí. La intervención de la Fiscalía se centra en las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por órganos judiciales y en los recursos de amparo.

6. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas

Esta Fiscalía interviene en los procedimientos ante el Tribunal de Cuentas, que es un órgano de control reconocido en la Constitución Española como órgano que fiscaliza las cuentas y la gestión económica del sector público. Así mismo tiene una función jurisdiccional, encaminada a exigir la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de fondos públicos.

7. La Fiscalía de la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional tiene su sede en Madrid y es un órgano con jurisdicción en todo el territorio nacional, constituyendo un tribunal centralizado y especializado en las materias que se recogen en la Ley. En el orden penal, en la persecución de delitos con un componente que excede de un territorio y alcanza un nivel nacional e incluso internacional. Es el caso de delitos de terrorismo, delitos contra altas instituciones del Estado o ciertos delitos cometidos en el extranjero.



8. Las Fiscalías especiales

Actúan en procedimientos que se llevan ante la Audiencia Nacional dentro de algunos delitos que son de su competencia, y que por razón de su complejidad y de la materia, requieren una alta especialización dentro del Ministerio Fiscal, como son el tráfico de drogas y la corrupción.

La **Fiscalía Especial Antidroga** interviene en los procesos penales por delitos relativos al tráfico de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas o blanqueo de capitales relacionado con este tráfico que sean competencia de la Audiencia Nacional y de los Juzgados Centrales de Instrucción. Además, investiga, coordina la actuación de las distintas fiscalías en estas materias.

La **Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada**, bajo la premisa de la especial trascendencia del hecho, investiga y conoce de los procesos relativos a ciertos delitos de naturaleza económica cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, fundamentalmente relacionados con el fenómeno de la corrupción. Sin perjuicio de la competencia de las Fiscalías de la Audiencia Nacional y Antidroga, asume la investigación de la actividad económica de grupos delictivos organizados o su aprovechamiento económico de actividades delictivas.

9. La Fiscalía Jurídico Militar

En el ámbito de la jurisdicción militar, las competencias del Ministerio Fiscal las asume la Fiscalía Jurídico Militar.

La Fiscalía Jurídico Militar está integrada por la Fiscalía Togada, la Fiscalía del Tribunal Militar Central y las Fiscalías de los Tribunales Militares Territoriales. La Togada está dirigida por el Fiscal Togado e integrada al menos por un General Auditor y un fiscal de sala perteneciente a la carrera fiscal. Está regulada en la Ley Orgánica de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar.

10. La Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos

El Delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal informa y asesora a los órganos y unidades del Ministerio Fiscal y a la plantilla de fiscales de las obligaciones que les incumben en materia de protección de datos. Asimismo, dirige la Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos.



11. Fiscalías territoriales

La Fiscalía de la Comunidad Autónoma radica en su capital y ejerce sus funciones ante el Tribunal Superior de Justicia. Al frente está un/a fiscal superior, y todos los integrantes de la plantilla que desempeñan sus funciones en el ámbito territorial de la comunidad están sujetos a su autoridad en virtud de los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica. Ostenta la representación del Ministerio Fiscal en ese territorio.

La Fiscalía Provincial, por su parte, ejerce las funciones del Ministerio Fiscal en ese ámbito territorial. Para adaptar su organización a las circunstancias y necesidades de cada territorio, pueden existir unidades diferenciadas de la Fiscalía Provincial, pero bajo su dependencia. Es el caso de las Fiscalías de Área y Secciones Territoriales. Para crearlas se tienen en cuenta factores como el volumen de asuntos, número de órganos judiciales o la existencia de secciones desplazadas de la Audiencia Provincial.

Por la singularidad de la materia o el volumen de actuaciones, las Fiscalías de las Comunidades Autónomas y Provinciales pueden establecer, además, secciones especializadas.







Régimen disciplinario de los fiscales

El régimen disciplinario de las/los fiscales se encuentra regulado en el Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo, que clasifica las faltas en tres categorías: muy graves, graves y leves, cada una con sus respectivas sanciones.

Esta norma creó la figura del Promotor de la Acción Disciplinaria del Ministerio Fiscal. Esta figura es responsable de iniciar, tramitar y proponer la resolución de los expedientes disciplinarios, por hechos susceptibles de ser considerados faltas atribuidas a los representantes del Ministerio Fiscal en el ejercicio de su cargo.

El mandato del Promotor de la Acción Disciplinaria dura dos años y no puede ser prorrogado. Pueden cesar por renuncia, finalización del mandato, incapacidad, incumplimiento grave de sus deberes, o por incurrir en responsabilidad disciplinaria.

¿Qué funciones tiene el Ministerio Fiscal?

Bajo los principios de legalidad e imparcialidad, el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones en las áreas que tiene atribuidas por las leyes, y actúa ante los tribunales de justicia en los distintos órdenes jurisdiccionales. En concreto, y sin ser exhaustivos:

En el orden penal:

- Interviene en todas las fases de los procesos penales, desde la instrucción hasta la ejecución, a excepción de aquellos por delitos exclusivamente perseguibles a instancia de parte.
- Ejerce las acciones penales y civiles, cuando proceda.
- Vela por la protección procesal de víctimas y perjudicados.
- Practica diligencias de investigación que pueden concluir remitiéndolas a la autoridad judicial para que tramite el procedimiento oportuno o archivándose, si no encuentra fundamentos para continuar con la denuncia.
- Visita los centros de internamiento y penitenciarios. Interviene en los procedimientos en materia de vigilancia penitenciaria por quejas y recursos de quienes se encuentran internados en estos centros.

En el orden civil:

- Interviene en los procesos de determinación de medidas de apoyo a personas con discapacidad, defendiendo la legalidad y el interés público y social. Visita también centros de internamiento.
- Actúa en los procesos de nulidad matrimonial, además de en los procesos matrimoniales de separación o divorcio cuando alguno de los interesados sea menor, discapaz o esté en situación de ausencia legal.
- Interviene en los procesos de determinación e impugnación de la filiación.
- Ejercita cualquier acción en defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, frente a los posibles abusos cometidos por compañías de servicios en las diversas formas de contratación masiva.

En el orden contencioso-administrativo:

- Emite dictamen en las cuestiones de falta de jurisdicción o falta de competencia que se plantean ante los órganos jurisdiccionales.
- Es parte en procedimientos en los que se invoca la vulneración de derechos fundamentales.
- Puede interponer los recursos en interés de ley.

En el orden social:

- Informa en las cuestiones de falta de jurisdicción o falta de competencia que se plantean ante los órganos jurisdiccionales de este orden.
- Interviene en los procesos de impugnación de convenios colectivos y en los procesos de impugnación de los estatutos de los sindicatos y de las asociaciones empresariales.
- Actúa en los procesos en que se invoca la vulneración de los derechos fundamentales y libertades públicas, de la libertad sindical o de trato discriminatorio.
- Interviene en los recursos de casación y en los que se tramitan para la unificación de doctrina.

Ante el Tribunal Constitucional:

- Interviene en las cuestiones de inconstitucionalidad promovidas por jueces y tribunales.
- Está legitimado para interponer recursos de amparo y es parte en todos los procedimientos de esa naturaleza en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley.

Ante el Tribunal de Cuentas:

- Es oído por el tribunal cuando ejerce su función fiscalizadora sobre el sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficiencia y economía.
- Interviene como demandante en los procedimientos en los que se exige responsabilidad contable.

En materia de menores:

Reforma

- Instruye los procedimientos y dirige la investigación para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de delitos. Se constituye en garante del respeto de los derechos fundamentales de los menores infractores y de las víctimas. Promueve soluciones extrajudiciales.
- Solicita del juez de menores la adopción de medidas cautelares durante la tramitación del procedimiento. En la solicitud de medidas definitivas, siempre actúa orientado a la satisfacción del interés superior del menor, velando por que se modifiquen o sustituyan, si es preciso, las impuestas en sentencia.

Protección

- Informa a la entidad pública de protección de menores de cuantas situaciones tenga conocimiento cuando exista un menor en situación de riesgo o desamparo para que se adopten las medidas legalmente previstas. Conoce de las medidas (tutela automática, guarda, acogimiento) que las entidades públicas competentes adopten para la protección de menores en situación de desamparo, e interviene en los procedimientos para su impugnación.
- Puede promover ante el juez la adopción de medidas en protección de menores o impugnar las adoptadas por la Administración, cuando considere que no se ajustan a su superior interés.

Cooperación internacional

La cooperación judicial internacional es un instrumento indispensable para la eficacia de la justicia. La progresiva eliminación de fronteras en la Unión Europea y la consolidación de una delincuencia transnacional organizada ha convertido el auxilio entre autoridades judiciales de distintos países en el mecanismo necesario para luchar contra el crimen.

El Ministerio Fiscal tiene que “promover o, en su caso, prestar el auxilio judicial internacional previsto en las leyes, tratados y convenios internacionales”, tal y como establece el artículo 3.15 de su Estatuto Orgánico. En este sentido, los fiscales son autoridad judicial a los efectos de la cooperación judicial internacional. En el ámbito europeo ello deriva de instrumentos tan relevantes como el Convenio Europeo de Asistencia Judicial, el Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen y el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea.

La Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado asume el ejercicio y la coordinación de esas funciones atribuidas a las/los fiscales en cooperación internacional. Entre ellas, las de coordinar y dirigir la Red de Fiscales de Cooperación Judicial Internacional. Además, es el punto de contacto para los fiscales españoles que trabajan para organizaciones u organismos internacionales.

La Fiscalía española, con el desplazamiento de fiscales como expertos, participa de forma relevante en proyectos internacionales de cooperación al desarrollo, implementados en el marco de la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global.

La Fiscalía General participa periódicamente en las reuniones internacionales de Fiscales Generales tanto en el Consejo de Europa, la Unión Europea o en el seno de otras organizaciones iberoamericanas o mundiales.

La Fiscalía Española se integra activamente en todas las estructuras de cooperación creadas internacionalmente:





a) Eurojust

Se creó en virtud de la Decisión 2002/187/JAI del Consejo, como un órgano de la UE con personalidad jurídica para promover y mejorar la coordinación y la cooperación entre las autoridades judiciales competentes de los Estados miembros. Esta decisión ha sido sustituida por el Reglamento 2018/1727, del Parlamento y el Consejo, que convierte a Eurojust en la Agencia de la Unión Europea para la cooperación judicial penal. Eurojust apoyará y reforzará la coordinación y la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de investigar y perseguir las formas de delincuencia grave que afecten a dos o más Estados miembros, basándose en las operaciones efectuadas y en la información proporcionada por las autoridades de los Estados miembros, por Europol, por la Fiscalía Europea y por la OLAF.

b) Red Judicial Europea (RJE/EJN)

Creada por la Acción Común de 29 de junio de 1998 tiene también por objeto "facilitar la cooperación judicial penal entre los Estados miembros de la Unión". Está compuesta por una serie de puntos de contacto en cada Estado miembro, que suelen ser las autoridades centrales responsables de la cooperación judicial internacional o aquellas otras autoridades judiciales o del Ministerio Público con responsabilidades específicas en el marco de la cooperación internacional.

c) IberRED

Su objetivo es optimizar la cooperación judicial en materia penal y civil entre los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, complementando la labor que en estas áreas llevan a cabo los poderes ejecutivos y las autoridades centrales respectivas. Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Ministerios de Justicia son los tres pilares sobre los que descansa IberRED.

d) AIAMP

La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos fue fundada en 1954 en la República Federativa de Brasil, como Asociación Interamericana de Ministerios Públicos y, posteriormente, con la incorporación de España y Portugal, pasó a denominarse Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. La AIAMP busca dinamizar la actividad de las/los fiscales en la administración de justicia iberoamericana, como corresponde al papel de defensores de la legalidad y de los derechos humanos, base de la consolidación del Estado de Derecho. Actualmente está formada por veintidós países de Iberoamérica, además de España, Portugal y Andorra, que se incorporó en el año 2019.

e) Red de Fiscales de Cooperación Judicial Internacional

En cada una de las fiscalías territoriales existe un/a fiscal integrante de esta red, a quien corresponde, entre otras funciones, despachar las solicitudes de auxilio judicial internacional recibidas en la fiscalía y colaborar con el resto de fiscales en la redacción de las comisiones rogatorias que deban dirigirse a autoridades judiciales extranjeras.

La Fiscalía Europea

El Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea, que funciona como un órgano de la Unión Europea de carácter independiente, cuya misión es investigar y perseguir delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea, asistidos y apoyados por las autoridades nacionales. Las fiscalías de los Estados miembros de la Unión Europea participan en ella a través de Fiscales Europeos y Fiscales Europeos Delegados.

Transparencia

La Fiscalía General del Estado está comprometida con las obligaciones de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y ofrece a los ciudadanos una gestión transparente de sus actividades.

A través del Portal de la Transparencia, en www.fiscal.es, la Fiscalía General del Estado brinda a la ciudadanía información institucional sobre su estructura organizativa y acerca de la actividad de la Fiscalía General del Estado, de la Junta de Fiscales de Sala, de la Junta de Fiscales Superiores y del Consejo Fiscal, así como información de índole económica, presupuestaria y estadística relacionada con la actividad del Ministerio Fiscal.

Así mismo la sección de Fiscalía Accesible garantiza el acceso al portal web del Ministerio Fiscal a las personas vulnerables y/o con discapacidad.







The Spanish Public Prosecution Service

Table of contents

The Public Prosecution Service: constitutional body	02
An institution with history	03
The headquarters of the Prosecutor General's Office	04
Career in the prosecution service	05
Organisation of the Public Prosecution Service	06
Disciplinary procedure for prosecutors	13
What are the functions of the Public Prosecution Service?	14
International cooperation	16
The European Public Prosecutor's Office	18
Transparency	18

The Public Prosecution Service: constitutional body

The Prosecution Service is a constitutional body, as stated in Article 124 of the Spanish Constitution and its legitimacy and relevance stem from the Constitution itself. Within the framework of the system of separation of powers, it forms part of the judicial branch, has its own legal personality and functional autonomy and is present throughout the State.

The Public Prosecution has as its **mission** to promote legal actions in defence of legality, the rights of citizens and the public interest as defined by law.

Through its own bodies, the State Prosecution Service exercises its functions in accordance with the principles of **unity of action and hierarchical subordination**, which guarantee a consistent and coherent application of the law throughout the territory.

In addition, it acts in accordance with the principles of **legality and impartiality**. In other words, every action of the Prosecution Service is underpinned by the Constitution and the law, and is undertaken with objectivity and independence.

There is one Prosecution Service for the entire State. Prosecutors have authority status and act as representatives of the institution.

The law that governs the Public Prosecution Service is the Organic Statute of the Prosecutor's Office, approved by Law 30/1981 of 30 December, substantially amended by Law 24/2007 of 9 October. This was implemented by the Regulation adopted by Royal Decree 305/2022 of 3 May, governing its organisation, structure, principles, rights and duties, admission to careers in the prosecution service and the disciplinary procedure.





An institution with history

In the past, terms such as “king’s man” or “procurator fiscal” were used as historical precedents for what we understand today as the Public Prosecution Service. However, it was the Organic Law on the Judiciary of 1870 that directly entrusted prosecutors with promoting justice, defending the public interest and representing the government in its relations with the Judiciary. The subsequent laws on procedure, of 1881 and 1882, provided for the intervention of prosecutors in civil and criminal proceedings, with a position of key importance, differentiated from the other parties.

In 1926, the first Statute on the Public Prosecution Service as an autonomous institution was approved by a Royal Decree of 21 June, giving prominence to its duty to promote the operation of justice and the defence of public interests, and to ensure observance with the laws and represent the Government in its relations with the Judiciary.

By contrast, the Regulation of the Statute of the Prosecution Service, approved by a Decree of 21 February 1958, defined the Prosecution Service as the representative of the Government in its relations with the Judicial Administration.

Subsequently, Decree 437/1969 of 27 February approving the Regulation of the Statute of the Prosecution Service, which repealed its predecessor, structured the Prosecution Service as a means of communication between the Government and the Courts of Justice.

This structure was removed in the 1978 Constitution, which confers on the Prosecution Service the status of an autonomous institution, disassociated from the Government and the General Council of the Judiciary, whose mission is to promote the operation of justice, defend legality, the rights of citizens and the public interest safeguarded by law, ensure the independence of the courts and strive for the interests of society to be met.



The headquarters of the Prosecutor General's Office

Today, the headquarters of the Prosecutor General's Office is located on one of the main thoroughfares in Madrid: Paseo de la Castellana, at number 17. However, that was not always the case; it was previously located at the Palace de las Salesas, home of the Supreme Court.

The building that now houses the headquarters of the State Prosecutor General is an architectural jewel built in 1912 by the family of the Marquis of Fontalba and Cubas, a palace that can also be accessed at Calle Fortuny, 4, with a restrained and balanced garden.

Since the State took over the property in the 1940s, the building has had various public uses. Its most notable role was as the seat of the Supreme Council of Military Justice, the highest military Court, until it was abolished.

Following a restoration completed in late 2004, the building has been returned to its former glory, conferring dignity on the institution that it houses. It was officially opened by Their Majesties King Juan Carlos and Queen Sofia on 11 January 2006.



Career in the prosecution service

Admission to the career is through open competition between Law graduates who meet the established skill requirements. The same competitive exams are taken to enter a career in the judiciary and the prosecution service. After they pass the theory tests, candidates choose which of the two careers to enter. Those who choose a career in the prosecution service must complete a theoretical and practical training course at the Centre for Legal Studies. They then enter the service by swearing an oath and take up their position.

The organisational staffing structure of the Public Prosecution Service is made up of Supreme Court High prosecutors, equated with Supreme Court judges,

prosecutors, equated with senior judges, and public attorneys, equated with lower-court judges. These are what are known as the first, second and third categories of the prosecution service career system.

Members of the Public Prosecution Service have a status on the same footing as senior judges, except for the specific features of the institution, and the same honorific titles and forms of address as members of the judiciary. As such, the provisions of the Organic Law on the Judiciary shall be applicable in a supplementary way in all respects not expressly provided for in the Organic Statute of the Prosecutor's Office (Law on Prosecutors).

Organisation of the Public Prosecution Service

1. The State Prosecutor General

The State Prosecutor General is the senior head and representative of the Public Prosecution Service. He or she is appointed and dismissed by the King, on proposal by the Government, after hearing the General Council of the Judiciary and after his or her suitability is assessed by the relevant parliamentary committee. As such, the three branches of state power take part in the appointment. The person selected must be a Spanish jurist of recognised prestige who has actively practised the profession for over fifteen years.

The mandate of the State Prosecutor General is four years and he or she can only be dismissed for reasons specified by law, which, where appropriate, shall be assessed by the Council of Ministers. In any event, he or she steps down with the Government that proposed him or her, but cannot be dismissed by it.

The State Prosecutor General acts impartially and independently, and cannot receive orders from the Government or any other body. In any event, the Government may submit requests to the State Prosecutor General to bring any relevant actions before the courts to defend the public interest. He or she shall adopt a decision as to whether the requested action is appropriate after hearing the Board of High Prosecutors. The governments of the Autonomous Regions may also make requests of this type through the senior prosecutor in each region.

The State Prosecutor General issues any orders and instructions that are appropriate for the service, the internal order of the institution and the exercise of prosecutorial functions, which may be of a general nature or related to specific matters. The general guidelines are essential to maintain the principle of unity of action and are put into effect primarily through three instruments: circulars, instructions and consultations.

Circulars contain general criteria for action and

interpretation of regulations, and also set standards to define the structure and operation of Public Prosecution Service bodies. **Instructions**, of lesser significance than circulars, are more specific provisions on actions and organisation. **Consultations** resolve doubts about the interpretation of specific rules.

The State Prosecutor General's Office supports the State Prosecutor General in his or her functions. Within the Office, there are several units run by the State Prosecutor General:

- The Prosecution Inspection Service exercises powers of inspection that are permanently delegated by the State Prosecutor General.
- The Technical Secretariat supports the State Prosecutor General with studies, investigations and reports, and contributes to prosecutors' training.
- Investigations and reports, and contributes to prosecutors' training.
- The Support Unit undertakes tasks of representation and institutional relations with public authorities, along with communication and citizen assistance work. It is responsible for the analysis and preparation of reports relating to the organisation and operation of the Public Prosecution Service in the areas of statistics, information technology, personnel, material resources, information, documentation and transparency.





General Prosecutor's Specialized Units

The impetus of the principle of specialisation has given rise to the creation of specialised units at the State Prosecutor General's Office. The process of specialisation aids the development of specialised technical criteria and coordination in the various departments. In the exercise of their duties, these units prepare reports on the regulatory texts pertaining to the speciality. The Units are led by High prosecutors, assisted by prosecutors.

There are currently the following specialist units:

- Violence against women
- Health and safety in the workplace
- Environment
- Human trafficking and immigration
- Road safety
- Minors
- International cooperation
- Cybercrime
- Protection of people with disabilities and the elderly
- Hate crimes and discrimination
- Human rights and democratic memory
- Economic crimes
- Crimes against Public Administration

With the same purpose, there are delegated High prosecutors, appointed by the State Prosecutor General to exercise their duties in specific areas such as the following:

- Civil
- Social
- Administrative
- Protection and care of victims in criminal proceedings
- Prison oversight

In turn, each speciality has delegated prosecutors distributed throughout Spain, forming a dense network.



2. The Prosecutorial Council

The Prosecutorial Council is the representative body of the Prosecution Service. It is chaired by the State Prosecutor General and is formed of the ex-officio members (the Deputy Chief Prosecutor of the Supreme Court and the Chief of the Prosecution Inspection Service) and the elected members, comprising nine prosecutors belonging to any of the categories of the prosecution service, elected for a period of four years by all members of the Public Prosecution Service in active service.

As the body that assists the State Prosecutor General in his or her duties, its main powers include advising him or her in any fields required, developing general criteria to ensure unity of action of the Public Prosecution Service in the structure and functioning of its bodies, reporting on proposals regarding appointments to various positions and promotions, encouraging appropriate reforms to the service and the duties of prosecutors and reporting on draft bills or regulations that affect the structure, organisation and functions of the Public Prosecution Service. Its remit also includes resolving appeals against rulings issued in disciplinary proceedings by chief prosecutors.

3. The Board of High Prosecutors and the Board of Senior Prosecutors of the Autonomous Regions

The Board of High Prosecutors is a technical advisory body that assists the State Prosecutor General, who chairs it, in case-law and technical matters. It is formed of the Deputy Chief Prosecutor of the Supreme Court and the Senior Prosecutors. This Board helps the Prosecutor General to establish uniform criteria for legal interpretation and action, in addition to answering consultation requests, drawing up reviews and circulars, and preparing projects and reports that must be submitted to the Government.

In addition, the main role of the Board of Senior Prosecutors of the Autonomous Regions is to ensure uniformity and coordination in the actions and operation of prosecution services throughout the State. It is also chaired by the State Prosecutor General and is formed of the Deputy Chief Prosecutor of the Supreme Court, the Superior Prosecutors and the Chief Prosecutor of the Technical Secretariat, who acts as secretary.

4. The Prosecutor's Office at the Supreme Court

This prosecution service exercises its duties before the Supreme Court, which is the highest court in all branches of law with jurisdiction throughout Spain. In parallel to how this court is structured, the prosecution service is divided into sections that act before the various Chambers of the Court: Civil, Criminal, Administrative, Social and Military Matters. Its most characteristic powers include the resolution of cassation appeals and appeals for review against sentences handed down by lower courts. The State Prosecutor General is the direct head, assisted and substituted by the Deputy Chief Prosecutor of the Supreme Court.

5. The Prosecutor's Office at the Constitutional Court

This prosecution service acts before the Constitutional Court, governed by its own Organic Law and with jurisdiction throughout Spain. This court is competent to hear unconstitutionality appeals against laws and regulatory provisions with the force of law, in addition to appeals for constitutional protection for violations of fundamental rights and freedoms and conflicts of authority between the State and Autonomous Regions or between such regions. The actions of the Prosecution Service focus on questions of unconstitutionality raised by courts and appeals for constitutional protection.

6. The Prosecutor's Office at the Court of Auditors

This prosecution service acts in proceedings before the Court of Auditors, which is a control body recognised in the Spanish Constitution as the body that supervises the accounts and economic management of the public sector. It also has a judicial function, oriented towards enforcement of the accounting responsibility held by parties in charge of managing public funds.

7. The Prosecutor's Office at the National High Court

The seat of the National High Court is located in Madrid, and it is a body with jurisdiction throughout national territory, comprising a centralised court specialising in the matters set out in Law. In the criminal branch, in the prosecution of offences with a component that transcends a region and extends to the national or even international level. This is the case for offences of terrorism, offences against high-level State institutions or certain offences committed abroad.



8. Special Prosecutor's Offices

These prosecution services act in proceedings before the National High Court in some offences that fall within their jurisdiction and which, due to their complexity and subject matter, require a high level of specialisation within the Public Prosecution Service, such as drug trafficking and corruption.

The **Anti-Drugs Special Prosecutor's Office** acts in criminal proceedings for offences involving the trafficking of drugs, narcotics and psychotropic substances or money laundering related to such trafficking which fall under the jurisdiction of the National High Court and the Central Courts of Investigation. In addition, it investigates and coordinates the actions of the various Prosecutor's Offices in these matters.

The **Special Prosecutor's Office for Corruption and Organised Crime**, under the premise of the particular significance of the offence, investigates and prosecutes on proceedings relating to certain offences of a financial nature, perpetrated by public officials in the exercise of their duties, fundamentally related to the phenomenon of corruption. Save for the special competence to the competence of the Anti-Drugs and National High Court Prosecutor's Offices, it is responsible for investigating the financial activity of organised crime groups or their economic exploitation of criminal activities.

9. The Military Justice Prosecutor's Office

In the field of military jurisdiction, the powers of the Public Prosecution Service are taken over by the Military Justice Prosecutor's Office.

The Military Justice Prosecutor's Office is formed of the Military Prosecutor's Office, the Prosecutor's Office attached to the Central Military Court and the Prosecutor's Offices attached to the Regional Military Courts. It is headed by the Military Prosecutor and formed of one Auditor General and a Senior Prosecutor belonging to the Prosecution Service. It is regulated in the Organic Law on Competence and Organisation of Military Jurisdiction.

10. The Data Protection Supervision and Monitoring Unit

The Data Protection Officer of the Public Prosecution Service informs and advises the bodies and units of the Prosecution Service and the staff of prosecutors on their obligations regarding data protection. He or she also runs the Data Protection Supervision and Monitoring Unit.



11. Regional Prosecutor's Offices

The Prosecutor's Office of each Autonomous Region is located in its capital city and exercises its duties before the High Court of Justice of the Autonomous Region. It is headed by a superior prosecutor and all the members of staff who undertake their duties in the territory of the region are subject to his or her authority by virtue of the principles of unity of action and hierarchical subordination. He or she represents the Public Prosecution Service in that region.

The Provincial Prosecutor's Office, exercise the duties of the Public Prosecution Service in their province. To adapt the organisation of the services to the circumstances and needs of each province, there may be separate units of the Provincial Prosecution Service, under its authority. This is the case for Area Prosecutor's Offices and Local Sections. Various factors are taken into account to create them, such as volume of cases, number of courts and the existence of decentralised sections of the Provincial Court.

Regional and Provincial Prosecutor's Offices may also set up specialised sections based on the particular characteristics of the subject matter or the volume of proceedings.







Disciplinary procedure for prosecutors

The disciplinary procedure for prosecutors is regulated by Royal Decree 305/2022 of 3 May, which divides offences into three categories: very serious, serious and minor, each with its respective sanctions.

This decree created the post of Promoter of Disciplinary Action of the Public Prosecution Service. This figure is responsible for initiating, conducting and proposing the resolution of disciplinary proceedings for acts that may be considered misconduct attributed to representatives of the Public Prosecution Service in the exercise of their duties.

The mandate of the Promoter of Disciplinary Action lasts two years and cannot be extended. They may step down due to resignation, the end of their mandate, incapacity, serious breach of duties, or because they are liable to disciplinary action.

What are the functions of the Public Prosecution Service?

Under the principles of legality and impartiality, the Public Prosecution Service performs its functions in the areas assigned to it by law and acts before the courts of justice in the various branches of law. Specifically, but not exhaustively:

Criminal matters:

- It acts at every stage of criminal proceedings (from investigation to enforcement), except for proceedings for offences prosecuted exclusively at the request of a party.
- It brings criminal and civil actions, when appropriate.
- It ensures the procedural protection of victims and injured parties.
- It takes investigative steps which can be concluded by submitting them to the judicial authority to conduct the appropriate proceedings or staying the complaint if no grounds to continue are found.
- It visits correctional facilities for minors and prisons. It acts in proceedings in the field of prison oversight arising from complaints and appeals from individuals in custody in such institutions.

Civil matters:

- It acts in processes to determine support measures for people with disabilities, protecting legality and public and social interests. It also visits correctional facilities for minors.
- It acts in marriage annulment proceedings, in addition to marriage separation or divorce proceedings when one of the parties concerned is a minor, is disabled or has been legally declared missing.
- It acts in proceedings to determine and challenge filiation.
- It brings actions of any kind in defence of the interests of consumers and users, against possible abuses committed by service companies in the various forms of mass contracts.

Administrative matters:

- It issues opinions on issues of lack of jurisdiction or lack of competence submitted to courts.
- It appears as a party in proceedings in which an infringement of fundamental rights is alleged.
- It can lodge appeals in the interests of the law.

Social matters:

- It issues reports on issues of lack of jurisdiction or lack of competence submitted to courts in this branch.
- It acts in proceedings challenging collective agreements and in proceedings challenging trade union charters and business association statutes.
- It acts in proceedings involving assertions of the infringement of fundamental rights and civil liberties or freedom of association or allegations of discriminatory treatment.
- It acts in cassation appeals and appeals for the unification of precedent.

Before the Constitutional Court:

- It acts in questions of unconstitutionality raised by judges and courts.
- It has standing to lodge constitutional protection appeals and is a party to all proceedings of this nature in defence of legality, the rights of citizens and the public interest safeguarded by law.

Before the Court of Auditors:

- It is heard by the Office when it exercises its auditory function with regard to whether the economic and financial activity of the public sector conforms to the principles of legality, efficiency and economy.
- It acts as a claimant in proceedings involving the enforcement of accounting responsibility.

In the area of minors:

Criminal proceedings against minors

- It conducts proceedings and directs investigations to impose liability on individuals aged over fourteen and under eighteen for the perpetration of offences. It acts as a guarantor of respect for the fundamental rights of juvenile offenders and victims. It files out-of-court settlements.
- It submits requests to juvenile court judges to adopt precautionary measures during the conduct of proceedings. In requests for final measures, it always directs its actions towards serving the best interests of the minor, ensuring that any such measures imposed in the judgment are modified or replaced, if necessary.

Protection

- It informs the public entity for the protection of minors in any situations of which it has knowledge, when there is an at-risk or abandoned minor, in order to facilitate the adoption of any measures provided for by law. It assesses applications for measures (automatic guardianship, custody, fostering) that the competent public entities may adopt for the protection of abandoned minors and acts in proceedings to challenge them.
- It can petition the court to adopt measures to protect minors or challenge those adopted by the Administration if it deems that they do not serve their best interests.

International cooperation

International judicial cooperation is an indispensable tool for effective administration of justice. The gradual elimination of borders in the European Union and the consolidation of transnational organised crime has made assistance between judicial authorities from different countries an essential mechanism to fight crime.

The Public Prosecution Service is required to "promote or, where appropriate, provide the international judicial assistance envisaged in international laws, treaties and conventions," as Article 3.15 of its Organic Statute sets out. In this regard, prosecutors are a judicial authority for the purposes of international judicial cooperation. In the European sphere this derives from relevant instruments such as the European Convention on Mutual Assistance, the Convention Implementing the Schengen Agreement, and the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union.

The International Cooperation Unit of the State Prosecutor General's Office is responsible for exercising and coordinating these functions attributed to prosecutors in international cooperation. They include coordinating and directing the Network of Prosecutors for International Judicial Cooperation. In addition, it is the point of contact for Spanish prosecutors who work for international organisations or bodies.

The Spanish Public Prosecution Service plays a significant role, with prosecutors as visiting experts, in international development cooperation projects, implemented under Law 1/2023 of 20 February on Cooperation for Sustainable Development and Global Solidarity.

The State Prosecutor General's Office participates on a regular basis in international meetings of Prosecutors General both under the Council of Europe and the European Union, and within other Ibero-American and global organisations.

The Spanish State Prosecutor General's Office is an active member of all the international cooperation structures:





a) Eurojust

Established by Council Decision 2002/187/JHA, as an EU body with legal personality to promote and improve coordination and cooperation between the competent judicial authorities in Member States. This decision was replaced by Regulation 2018/1727 of the Parliament and of the Council, making Eurojust the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation. Eurojust shall support and strengthen coordination and cooperation between national investigating and prosecuting authorities in relation to serious crime that affects two or more Member States, on the basis of operations conducted and information supplied by the Member States' authorities, by Europol, by the EPPO and by OLAF.

b) European Judicial Network (RJE/EJN)

Created by the Joint Action of 29 June 1998, its role is also to "facilitate judicial cooperation in criminal matters between the EU Member States". It is formed of a series of contact points in each Member State, which are usually the central authorities responsible for international judicial cooperation or other judicial authorities or the Prosecution Service with specific responsibilities in international cooperation.

c) IberRED

Its objective is to optimise judicial cooperation in criminal and civil matters between the countries of the Ibero-American Community of Nations, supplementing the work undertaken in these areas by the executive powers and the respective central authorities. Judiciaries, Prosecution Services and Ministries of Justice are the three pillars on which IberRED rests.

d) AIAMP

The Ibero-American Association of Prosecution Services was founded in the Federative Republic of Brazil in 1954 as the Inter-American Association of State Prosecution Services and subsequently, when Spain and Portugal joined, its name was changed to the Ibero-American Association of Prosecution Services. AIAMP seeks to give impetus to the activity of prosecutors in the administration of justice in Ibero-America, as befits the role of defenders of legality and human rights, underpinning the consolidation of the Rule of Law. It currently comprises twenty-two Latin American countries, in addition to Spain, Portugal and Andorra, which joined in 2019.

e) Network of Prosecutors for International Judicial Cooperation

At each of the regional prosecution services there is a prosecutor who forms part of this network, who is responsible for dispatching requests for international judicial assistance received at the prosecution service and cooperating with the other prosecutors in drafting Letters of Request to be addressed to judicial authorities abroad, among other functions.

The European Public Prosecutor's Office

Council Regulation (EU) 2017/1939 of 12 October 2017 implements enhanced cooperation on the establishment of the European Public Prosecutor's Office, which acts as an independent body of the European Union, whose mission is to investigate and prosecute offences affecting the financial interests of the European Union, assisted and supported by the national authorities. The prosecution services of the EU Member States participate therein through European Prosecutors and European Delegated Prosecutors.

Transparency

The Public Prosecution Service is committed to the obligations set out in Law 19/2013 of 9 December on transparency, access to public information and good governance and it offers transparent management of its activities to the public.

Through the Transparency Portal at www.fiscal.es, the Office of the State Prosecutor General provides the public with institutional information about its organisational structure and the activity of their bodies, along with economic, budget and statistical information relating to the activity of the State Prosecution Service.

In addition, the Accessible Prosecution Service section guarantees access to the State Prosecution Service website for vulnerable persons and/or people with disabilities.







Le Ministère Public espagnol

Table des matières

Le Ministère Public: organe constitutionnel	02
Une institution chargée d'histoire	03
La siège du Parquet général de l'État	04
La carrière de procureur	05
Organisation du Ministère Public	06
Régime disciplinaire des procureurs	13
Quelles sont les fonctions du Ministère Public?	14
Cooperation internationale	16
Le Parquet européen	18
Transparence	18

Le Ministère Public: organe constitutionnel

Conformément à l'article 124 de la Constitution espagnole, le ministère public est un organe constitutionnel. Par conséquent, sa légitimité et son importance découlent de la Constitution elle-même. Dans le cadre du schéma de la séparation des pouvoirs, il est intégré dans le pouvoir judiciaire, est doté d'une personnalité juridique propre, d'une autonomie fonctionnelle et d'une présence sur l'ensemble du territoire de l'État.

Sa **mission** est de promouvoir l'action de la justice en défendant la légalité, les droits des citoyens et l'intérêt public.

Par l'intermédiaire de ses propres organes, le ministère public exerce ses fonctions conformément aux principes **d'unité d'action et de dépendance hiérarchique**, qui garantissent l'application uniforme et cohérente de la loi sur l'ensemble du territoire.

Il agit aussi conformément aux principes de **légalité et d'impartialité**. C'est-à-dire que chaque action du ministère public se fonde sur la Constitution et sur les lois et est menée à bien avec objectivité et indépendance.

Le ministère public est unique pour l'ensemble de l'État. Les procureurs ont le statut d'autorité et agissent en tant que représentants de l'institution.

La loi régissant le ministère public est le Statut organique du ministère public, approuvé par la Loi 30/1981, du 30 décembre, substantiellement modifié par la Loi 24/2007 du 9 octobre. Elle est développée par le Règlement approuvé par l'Arrêté royal n° 305/2022 du 3 mai portant réglementation de son organisation, de sa structure, de ses principes, de ses droits, de ses devoirs, de l'accès à la carrière de procureur et de son régime disciplinaire.





Une institution chargée d'histoire

Par le passé, des termes tels que "homme du roi" ou "procureur fiscal" étaient utilisés comme précédents historiques pour ce que nous comprenons aujourd'hui comme ministère public. Mais c'est la Loi organique sur le Pouvoir judiciaire de 1870 qui a directement chargé les procureurs de promouvoir la justice, de défendre l'intérêt public et de représenter le gouvernement dans ses relations avec le Pouvoir judiciaire. Les codes de procédure ultérieurs, de 1881 et de 1882, prévoyaient l'intervention des procureurs dans les procédures civiles et pénales, avec une position clé et différenciée des autres parties.

En 1926, le premier statut du ministère public en tant qu'institution autonome a été approuvé par l'Arrêté royal du 21 juin qui souligne son devoir de promouvoir l'action de la justice, de défendre les intérêts publics, de veiller au respect des lois et de représenter le gouvernement dans ses relations avec le pouvoir judiciaire.

En revanche, le Règlement organique du statut du ministère public approuvé par Décret du 21 février 1958 définit le ministère public comme le représentant du gouvernement dans ses relations avec l'Administration de la justice.

Par la suite, le Décret 437/1969 du 27 février portant approbation du Règlement organique du Statut du ministère public et abrogeant le précédent configure le ministère public comme étant un organe de communication entre le gouvernement et les cours de justice.

Cette configuration disparaît avec la Constitution de 1978 qui confère au ministère public le statut d'institution autonome, détachée du gouvernement et du Conseil général du pouvoir judiciaire dont la mission est de promouvoir l'action de la justice, de défendre la légalité, les droits des citoyens et l'intérêt public protégé par la loi, de veiller à l'indépendance des tribunaux et de rechercher la satisfaction de l'intérêt social.



Le siège du Parquet Général de l'État

De nos jours, le Parquet général de l'État a son siège dans l'une des principales artères de Madrid: au numéro 17 du Paseo de la Castellana. Mais il n'en a pas toujours été ainsi car, par le passé, il était situé au Palais de las Salesas où se trouve la Cour suprême.

Le bâtiment qui est aujourd'hui le siège central du Parquet est un joyau architectural construit en 1912 par la famille du marquis de Fontalba y Cubas, un palais doté d'un jardin sobre et équilibré et auquel on accède aussi par le numéro 4 de la rue Fortuny.

Depuis que l'État a fait l'acquisition de la propriété dans les années quarante du siècle dernier, le bâtiment a connu plusieurs usages publics. Son rôle le plus notable a été celui de siège du Conseil suprême de la justice militaire, la plus haute instance judiciaire dans le domaine militaire, jusqu'à sa disparition.

Après des travaux de restauration achevés fin 2004, le bâtiment a retrouvé sa splendeur d'antan, apportant de la dignité à l'institution qu'il abrite. Il a été officiellement inauguré par Leurs Majestés le Roi Juan Carlos et la Reine Sofia le 11 janvier 2006.



La carrière de procureur

L'accès à la carrière de procureur se fait par voie de concours libre ouvert aux diplômés en droit qui remplissent les conditions de capacité requises. Le concours d'entrée aux carrières de juge et de procureur est conjoint. Après avoir réussi les épreuves théoriques, les candidats choisissent l'entrée dans telle ou telle carrière. Ceux qui choisissent la carrière de procureur doivent suivre un cours de formation théorique et pratique au Centre d'études juridiques, après quoi, ils entrent dans la carrière de procureur en prêtant le serment correspondant et en prenant possession du poste attribué dans le lieu d'affectation.

Le personnel organique du ministère public est composé de procureurs de chambre près la Cour suprême assimilés

à des magistrats de la Haute Cour, de procureurs assimilés à des magistrats et d'avocats-procureurs assimilés à des juges. Ils constituent ce que l'on appelle les première, deuxième et troisième catégories de la carrière de procureur.

Les membres du ministère public ont un statut assimilé à celui des magistrats, à l'exception des particularités propres à l'institution, et bénéficient des mêmes honneurs et du même traitement que les membres de la carrière judiciaire. C'est pourquoi, lorsque ce n'est pas expressément réglementé dans le Règlement ou dans le statut organique, les dispositions de la Loi organique sur le Pouvoir judiciaire s'appliqueront à titre supplétif.

Organisation du Ministère Public

1. Le Procureur général de l'État

Le/la Procureur/e général/e de l'État occupe la direction suprême et la représentation du ministère public. Il est nommé et révoqué par le Roi, sur proposition du gouvernement, après consultation du Conseil général du pouvoir judiciaire et après évaluation de son aptitude par la commission correspondante du Congrès des députés. Les trois pouvoirs de l'État interviennent donc dans sa nomination. Le choix doit se porter sur des juristes espagnols de renom ayant plus de quinze ans d'exercice effectif de leur profession.

Le mandat du Procureur général dure quatre ans et il ne peut être révoqué que pour des raisons spécifiées par la loi, qui seront évaluées, le cas échéant, par le Conseil des ministres. En tout état de cause, il cesse d'exercer ses fonctions avec le gouvernement qui l'a proposé, mais ne peut pas être révoqué par celui-ci.

Le Procureur général agit avec impartialité et indépendance et ne peut pas recevoir d'ordres ni du gouvernement ni d'aucun autre organe. En tout état de cause, le gouvernement pourra demander au Procureur général de l'État d'engager devant les tribunaux les actions pertinentes pour défendre l'intérêt public, lequel statuera sur la pertinence de l'action demandée après consultation du Conseil des procureurs de chambre. Les gouvernements des communautés autonomes peuvent aussi faire ce genre de demandes par l'intermédiaire du procureur supérieur de chaque communauté autonome.

Le Procureur général donne les ordres et les instructions nécessaires au service, à l'ordre interne de l'institution et à l'exercice des fonctions de procureur, lesquels peuvent être de nature générale ou porter sur des questions spécifiques. Les directives générales sont essentielles pour assurer le principe d'unité d'action et sont principalement mises en œuvre par le biais de trois instruments: les circulaires, les instructions et les consultations.

Les **circulaires** contiennent des critères généraux d'action et d'interprétation des règles et fournissent aussi des lignes directrices pour définir la structure et le fonctionnement des organes du ministère public. Les **instructions** qui sont moins importantes que les circulaires sont des dispositions plus spécifiques en matière d'action et d'organisation. Les **consultations** permettent de résoudre des doutes sur l'interprétation d'une règle.

Le Parquet général de l'État assiste le Procureur général dans ses fonctions. Le Parquet général de l'État se compose de plusieurs unités dirigées par le Procureur général:

- L'Inspection des procureurs exerce des compétences d'inspection par délégation permanente du Procureur général de l'État.
- Le Secrétariat technique assiste le Procureur général par des études, des enquêtes et des rapports et collabore à la formation des procureurs/procureures.
- L'Unité d'appui assure des tâches de représentation et de relations institutionnelles avec les pouvoirs publics ainsi que de communication et d'accueil aux citoyens. Elle est chargée de l'analyse et de l'élaboration de rapports sur l'organisation et le fonctionnement du ministère public dans des matières telles que les statistiques, l'informatique, le personnel, les moyens matériels, l'information, la documentation et la transparence.



Domaines spécialisés

La promotion du principe de spécialisation a conduit à la création d'unités spécialisées au sein du Parquet général de l'État. Le processus de spécialisation contribue à l'élaboration de critères techniques spécialisés et à la coordination dans les différents domaines. Dans l'exercice de leurs fonctions, ces unités rédigent des rapports sur les textes normatifs propres à leur spécialité. Les unités sont dirigées par des procureurs de chambre assistés par des procureurs.

Actuellement, il existe les unités spécialisées suivantes:

- Violences faites aux femmes
- Sécurité et santé au travail
- Environnement
- Traite de personnes et concernant les étrangers
- Sécurité routière
- Mineurs
- Coopération internationale
- Cybercriminalité
- Protection des personnes handicapées et des personnes âgées
- Délits de haine et discrimination
- Droits humains et mémoire démocratique
- Crimes économiques
- Crimes contre l'administration publique

Avec le même objectif, il existe des procureurs de chambre délégués, nommés par le Procureur général de l'État, pour exercer leurs fonctions dans des domaines spécifiques tels que:

- En matière civil
- En matière sociale
- En matière du contentieux-administratif
- En matière de protection et de tutelle des victimes dans la procédure pénale
- En matière d'application des peines

Chacune des spécialités dispose à son tour de procureurs délégués déployés sur l'ensemble du territoire qui forment un réseau très dense.



2. El Consejo des procureurs

Le Conseil des procureurs est l'organe de représentation de la carrière de procureur. Il est présidé par le/la procureur/e général/e de l'État et est composé de membres de droit (le/la substitut du procureur près la Cour suprême et le/la procureur/e de chambre en chef de l'Inspection) et de membres électifs, qui sont neuf procureurs appartenant à n'importe laquelle des catégories de la carrière de procureur, élus pour une période de quatre ans par tous les membres du ministère public en activité.

En tant qu'organe assistant le procureur général de l'État dans ses fonctions, il a parmi ses compétences principales de le conseiller dans les domaines qu'il souhaite, d'élaborer les critères généraux pour assurer l'unité d'action du ministère public dans la structure et le fonctionnement de ses organes, d'informer sur les propositions de nomination à différents postes et sur les promotions, de recommander les réformes nécessaires au service et à l'exercice de la fonction de procureur et d'informer sur les projets de loi ou des normes réglementaires affectant la structure, l'organisation et les fonctions du ministère public. Il a aussi parmi ses missions de statuer sur les recours formés contre des décisions rendues dans le cadre de dossiers disciplinaires par les procureurs en chef.

3. Le Conseil des procureurs de chambre et le conseil des procureurs supérieurs des communautés autonomes

Le Conseil des procureurs de chambre est un organe consultatif technique qui assiste le Procureur général de l'État qui le préside en matière doctrinale et technique. Il est composé du/de la substitut du procureur près la Cour suprême et des procureurs/procureuses de chambre. Ce conseil aide le procureur général dans la formation de critères unitaires d'interprétation et d'action juridique, en plus de résoudre, de consulter, d'élaborer des mémoires et des circulaires, et de préparer des projets et des rapports à soumettre au gouvernement.

Par ailleurs, le Conseil des procureurs supérieurs des communautés autonomes a pour fonction principale d'assurer l'unité et la coordination de l'action et du fonctionnement des parquets sur l'ensemble du territoire de l'État. Il est aussi présidé par le Procureur général de l'État et est composé du/de la Substitut du procureur près la Cour suprême, des procureurs/procureuses supérieurs/supérieures et du/de la procureur/e en chef du Secrétariat technique, qui agit en tant que secrétaire.

4. Le Parquet de la Cour suprême

Ce parquet exerce ses fonctions devant la Cour supérieure qui est la plus haute instance judiciaire dans tous les ordres avec compétence sur l'ensemble du territoire espagnol. Parallèlement à la manière dont cette cour est structurée, le parquet est divisé en sections qui agissent devant les différentes chambres de la Cour: civile, criminelle, du contentieux-administratif, sociale et militaire. Parmi ses compétences les plus caractéristiques se trouve le traitement des pourvois en cassation et des recours en révision formés contre des jugements rendus dans des instances inférieures. Le Procureur général de l'État exerce la direction directe, assisté et remplacé par le/la substitut du Procureur près la Cour suprême.

5. Le Parquet devant la Cour constitutionnelle

Ce Parquet intervient devant la Cour constitutionnelle, régie par sa propre loi organique et avec compétence sur l'ensemble du territoire espagnol. Cette cour est compétente pour connaître des recours en inconstitutionnalité formés contre des lois et des dispositions normatives ayant force de loi, ainsi que du recours en amparo pour violation des droits et des libertés fondamentaux, des conflits de compétence entre l'État et les communautés autonomes ou entre les communautés autonomes entre elles. L'intervention du Parquet se concentre sur les questions d'inconstitutionnalité soulevées par les juridictions et sur les recours en amparo.

6. Le Parquet de la Cour des comptes

Ce Parquet intervient dans les procédures portées devant la Cour des comptes qui est un organe de contrôle reconnu dans la Constitution espagnole en tant qu'organe qui contrôle les comptes et la gestion économique du secteur public. Il exerce aussi une fonction juridictionnelle visant à exiger la responsabilité comptable pouvant être encourue par ceux qui sont chargés de la gestion de fonds publics.

7. Le Parquet de l'Audience nationale

L'Audience nationale a son siège à Madrid et est un organe ayant compétence sur l'ensemble du territoire national et constitue un tribunal centralisé spécialisé dans les matières prévues par la loi. Dans l'ordre pénal, dans la poursuite de délits ayant une composante qui dépasse le cadre d'un territoire et atteint un niveau national et même international. C'est le cas des délits de terrorisme, des délits contre les hautes institutions de l'État, ou de certains délits commis à l'étranger.



8. Les parquets spéciaux

Ils interviennent dans les procédures portées devant l'Audience nationale concernant certains délits relevant de leur compétence et qui, en raison de leur complexité et de la matière, nécessitent un haut degré de spécialisation au sein du ministère public, tels que le trafic de drogue et la corruption.

Le parquet spécial anti-drogue intervient dans les procédures pénales pour des délits liés au trafic de drogue, aux stupéfiants et substances psychotropes ou au blanchiment de capitaux lié à ce trafic relevant de la compétence de l'Audience nationale et des tribunaux centraux d'instruction. En outre, il enquête et coordonne l'action des différents parquets dans ces matières.

Le parquet chargé de la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, sur la base de l'importance particulière du fait, enquête et connaît des procédures liées à certains délits de nature économique commis par des agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, principalement liés au phénomène de la corruption. Indépendamment de la compétence du Parquet de l'Audience nationale et du Parquet anti-drogue, il assume l'enquête sur l'activité économique de groupes criminels organisés ou sur leur exploitation économique d'activités criminelles.

9. Le Parquet militaire

Dans le domaine de la juridiction militaire, les compétences du ministère public sont assumées par le Parquet militaire.

Le Parquet militaire est composé de la Fiscalía Togada [Parquet près la chambre militaire de la Cour suprême], du Parquet du Tribunal militaire central et des Parquets des tribunaux militaires territoriaux. La Fiscalía Togada [Parquet près la chambre militaire de la Cour suprême] est dirigée par le Fiscal togado [Procureur en chef près la chambre militaire de la Cour suprême] et comprend au moins un général auditeur et un procureur de chambre appartenant à la carrière de procureur. Il est régi par la Loi organique sur la compétence et l'organisation de la juridiction militaire.

10. L'Unité de suivi et de contrôle de la protection des données

Le Délégué à la protection des données du ministère public informe et conseille les organes et unités du ministère public ainsi que le personnel des procureurs sur les obligations qui leur incombent en matière de protection des données. Il dirige aussi l'Unité de suivi et de contrôle de la protection des données.



11. Parquets territoriaux

Le parquet de la Communauté autonome se trouve dans sa capitale et exerce ses fonctions devant la Cour supérieure de justice. Il est dirigé par un/une procureur/e supérieur/e et tous les membres du personnel exerçant leurs fonctions dans le domaine territorial de la communauté autonome sont soumis à son autorité en vertu des principes d'unité d'action et de dépendance hiérarchique. Il assure la représentation du ministère public sur ce territoire.

Pour sa part, le Parquet provincial exerce les fonctions du ministère public dans ce domaine territorial. Pour adapter son organisation aux circonstances et aux besoins de chaque territoire, il peut exister des unités différenciées du Parquet provincial mais elles sont toutes placées sous sa dépendance. C'est le cas des Parquets régionaux et des sections territoriales. Pour les créer, des facteurs tels que le volume d'affaires, le nombre de juridictions ou l'existence de sections délocalisées de l'Audience provinciale sont pris en compte.

En raison de la singularité de la matière ou du volume des procédures, les Parquets des communautés autonomes et les Parquets provinciaux peuvent aussi établir des sections spécialisées.







Régime disciplinaire des procureurs

Le régime disciplinaire des procureurs/procureuses est réglementé par l'Arrêté royal n° 305/2022 du 3 mai, classant les fautes en trois catégories: très graves, graves et légères, chacune assortie de ses sanctions respectives.

Cette règle a créé la figure du promoteur de l'action disciplinaire du ministère public. Cette figure est chargée d'engager, de traiter et de proposer la résolution des dossiers disciplinaires concernant des faits susceptibles d'être considérés comme des fautes attribuées aux représentants du ministère public dans l'exercice de leurs fonctions.

Le mandat du promoteur de l'action disciplinaire dure deux ans et ne peut pas être prolongé. Il peut cesser ses fonctions pour cause de démission, de fin de mandat, d'incapacité, de manquement grave à ses devoirs ou d'engagement de sa responsabilité disciplinaire.

Quelles sont les fonctions du Ministère Public?

Sous les principes de légalité et d'impartialité, le ministère public exerce ses fonctions dans les domaines qui lui sont attribués par les lois et agit devant les tribunaux de justice dans les différents ordres juridictionnels. Plus précisément et sans être exhaustifs:

Dans l'ordre pénal:

- Il intervient dans toutes les phases des procédures pénales (de l'instruction à l'exécution), à l'exception de celles instruites pour des délits qui ne peuvent être poursuivis qu'à la demande d'une partie.
- Il exerce les actions pénales et civiles, le cas échéant.
- Il veille à la protection procédurale des victimes et des parties lésées.
- Il exécute des mesures d'enquête qui peuvent aboutir à leur transmission à l'autorité judiciaire pour le traitement de la procédure appropriée ou pour leur classement sans suite s'il n'y a pas lieu de donner suite à la plainte.
- Il visite les centres de rétention et les centres pénitentiaires. Il intervient dans les procédures en matière d'application des peines en raison de plaintes et de recours de personnes qui se trouvent dans ces centres.

Dans l'ordre civil:

- Il intervient dans les procédures de détermination de mesures de soutien aux personnes handicapées, en défendant la légalité et l'intérêt public et social. Il visite aussi des centres de rétention.
- Il intervient dans les procédures de nullité matrimoniale, ainsi que dans les procédures matrimoniales de séparation ou de divorce lorsque l'une des parties concernées est mineure, handicapée ou en situation d'absence juridique.
- Il intervient dans les procédures d'établissement et de contestation de la filiation.
- Il exerce toute action en défense des intérêts des consommateurs et des usagers, face aux éventuels abus commis par des sociétés de services dans les différentes formes de recrutement massif.

Dans l'ordre du contentieux-administratif:

- Il émet des avis sur les questions de défaut de juridiction ou de manque de compétence portées devant les juridictions.
- Il se constitue partie dans des procédures dans lesquelles la violation des droits fondamentaux est invoquée.
- Il peut former les recours dans l'intérêt de la loi.

Dans l'ordre social:

- Il informe sur les questions de défaut de juridiction ou de manque de compétence portées devant les juridictions de cet ordre.
- Il intervient dans les procédures de contestation des conventions collectives et dans les procédures de contestation des statuts des syndicats et des associations d'entreprises.
- Il agit dans les procédures où la violation des droits fondamentaux et des libertés publiques, de la liberté syndicale ou de traitement discriminatoire est invoquée.
- Il intervient dans les pourvois en cassation et dans les recours formés en vue de l'unification de la doctrine.

Devant la Cour constitutionnelle:

- Il intervient dans les questions d'inconstitutionnalité soulevées par les juges et les tribunaux.
- Il est habilité à former des recours en amparo et il se constitue partie dans toutes les procédures de cette nature pour défendre la légalité, les droits des citoyens et l'intérêt public protégé par la loi.



Devant la Cour des comptes:

- Il est entendu par le tribunal dans l'exercice de sa fonction de contrôle sur la conformité de l'activité économique et financière du secteur public aux principes de légalité, d'efficacité et d'économie.
- Il intervient en tant que demandeur dans les procédures visant à établir la responsabilité comptable.

En matière de mineurs:

Réforme

- Il instruit les procédures et mène l'enquête pour exiger la responsabilité des personnes âgées de plus de quatorze ans et de moins de dix-huit ans pour la commission de délits. Il se porte garant du respect des droits fondamentaux des mineurs délinquants et des victimes. Il encourage des solutions extrajudiciaires.
- Il demande au juge des enfants l'adoption de mesures conservatoires au cours de l'instruction de la procédure. Dans le cadre de la demande de mesures définitives, il agit toujours dans l'intérêt supérieur du mineur, en veillant à ce que celles prononcées par jugement soient modifiées ou remplacées si nécessaire.

Protection

- Il informe l'entité publique chargée de la protection des mineurs de toutes les situations dont il a connaissance lorsqu'un mineur est en situation de risque ou de détresse afin que les mesures prévues par la loi soient prises. Il connaît des mesures (tutelle automatique, garde, placement) que les entités publiques compétentes adoptent pour la protection des mineurs en situation de détresse et intervient dans les procédures pour leur contestation.
- Il peut solliciter auprès du juge l'adoption de mesures de protection des mineurs ou contester celles prises par l'Administration, lorsqu'il estime qu'elles ne sont pas conformes à leur intérêt supérieur.

Coopération internationale

La coopération judiciaire internationale est un instrument indispensable pour l'efficacité de la justice. La suppression progressive des frontières dans l'Union européenne et la consolidation d'une criminalité transnationale organisée ont fait de l'entraide entre autorités judiciaires de différents pays le mécanisme nécessaire pour lutter contre la criminalité.

Le ministère public doit "promouvoir ou, le cas échéant, fournir l'entraide judiciaire internationale prévue par les lois, les traités et les conventions internationales", comme le prévoit l'article 3.15 de son statut organique. À cet égard, les procureurs sont une autorité judiciaire aux fins de la coopération judiciaire internationale. Dans le cadre européen, cela découle d'instruments aussi importants que la Convention européenne d'entraide judiciaire, la Convention d'application de l'accord de Schengen et la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne.

L'Unité de coopération internationale du Parquet général de l'État assume l'exercice et la coordination de ces fonctions attribuées aux procureurs/procureures en matière de coopération internationale. Parmi celles-ci, le fait de coordonner et de diriger le Réseau des procureurs en matière de coopération judiciaire internationale. En outre, il est le point de contact pour les procureurs espagnols travaillant pour des organisations ou des organismes internationaux.

Avec le détachement de procureurs en tant qu'experts, le Parquet espagnol participe de manière significative à des projets internationaux de coopération au développement, mis en œuvre dans le cadre de la Loi 1/2023 du 20 février sur la coopération pour le développement durable et la solidarité mondiale.

Le Parquet général participe régulièrement aux réunions internationales des procureurs généraux, que ce soit au Conseil de l'Europe, à l'Union européenne ou au sein d'autres organisations ibéro-américaines ou mondiales.

Le Parquet espagnol est activement intégré à toutes les structures de coopération créées au niveau international:





a) Eurojust

Il a été créé en vertu de la Décision 2002/187/JAI du Conseil, en tant qu'organe de l'UE, avec une personnalité juridique pour promouvoir et améliorer la coordination et la coopération entre les autorités judiciaires compétentes des États membres. Cette décision a été remplacée par le Règlement 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil qui fait d'Eurojust l'agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale. Eurojust soutiendra et renforcera la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées de mener des enquêtes et de poursuivre les formes graves de criminalité affectant deux États membres ou plus, en se basant sur les opérations menées et sur les informations fournies par les autorités des États membres, par l'OLAF.

b) Réseau judiciaire européen (RJE/EJN)

Créé par l'action commune du 29 juin 1998, il a aussi pour objet de "faciliter la coopération judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union". Il est composé d'une série de points de contact dans chaque État membre, qui sont généralement les autorités centrales responsables de la coopération judiciaire internationale ou d'autres autorités judiciaires ou du ministère public ayant des responsabilités spécifiques dans le cadre de la coopération internationale.

c) IberRED

Son objectif est d'optimiser la coopération judiciaire en matière pénale et civile entre les pays de la Communauté ibéro-américaine des nations, complétant ainsi le travail effectué dans ces domaines par les pouvoirs exécutifs et les autorités centrales respectives. Les pouvoirs judiciaires, les ministères publics et les ministères de la Justice sont les trois piliers sur lesquels repose IberRED.

d) AIAMP

L'Association ibéro-américaine des ministères publics a été fondée en 1954 dans la République fédérative du Brésil sous le nom d'Association interaméricaine des ministères publics et plus tard, avec l'incorporation de l'Espagne et du Portugal, elle a été rebaptisée Association ibéro-américaine ministères publics. L'AIAMP vise à dynamiser l'activité des procureurs/procureures dans l'administration de la justice ibéro-américaine, conformément à leur rôle de défenseurs de la légalité et des droits humains, base de la consolidation de l'État de droit. Elle est actuellement composée de vingt-deux pays ibéro-américains ainsi que de l'Espagne, du Portugal et d'Andorre, qui l'a rejointe en 2019.

e) Réseau des procureurs en matière de coopération judiciaire internationale

Dans chacun des parquets territoriaux, il existe un /une procureur/procureure membre de ce réseau, à qui il incombe, entre autres fonctions, de traiter les demandes d'entraide judiciaire internationale reçues au parquet et de collaborer avec les autres procureurs dans la rédaction des commissions rogatoires à adresser aux autorités judiciaires étrangères.

Le Parquet européen

Le Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 met en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, qui fonctionne en tant qu'organe indépendant de l'Union européenne ayant pour mission d'enquêter et de poursuivre les délits portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, avec l'assistance et le soutien des autorités nationales. Les parquets des États membres de l'Union européenne y participent par l'intermédiaire de procureurs européens et de procureurs européens délégués.

Transparence

Le Parquet général de l'État est engagé envers les obligations de la Loi 19/2013 du 9 décembre, sur la transparence, l'accès à l'information publique et la bonne gouvernance et offre aux citoyens une gestion transparente de ses activités.

À travers le Portail de la Transparence, accessible sur www.fiscal.es, le Parquet général de l'État fournit aux citoyens des informations institutionnelles sur sa structure organisationnelle ainsi que sur l'activité du Parquet général de l'État, du Conseil des procureurs de chambre, du Conseil des procureurs supérieurs et du Conseil des procureurs ainsi que des informations d'ordre économique, budgétaire et statistique liées à l'activité du ministère public.

En outre, la section «Fiscalía Accesible» garantit l'accès au portail web du ministère public aux personnes vulnérables et/ou handicapées.



